



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



2019

AROTPLCAUDHLOREKIS
EMILIANO ZAPATA

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL

Dirección Contenciosa

Mesa: 5
Ur. 4-10v

103

Juicio de Amparo: [REDACTED]
Quejoso: DESART MX, S.A. DE C.V.
Asunto: Se rinde por informe justificado.

Cuaderno Principal.
Ciudad de México, a 8 de enero de 2019.

C. Juez Segundo de Distrito del Centro
Auxiliar de la Primera Región con residencia
en la Ciudad de México.
Presente.

Ana Lucía Tlahuech Rivera, Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación de la autoridad señalada como responsable C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 11 Bis, fracción XXXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004 y su última reforma publicada en dicho medio informativo oficial el 07 de febrero de 2018, en relación con el artículo Segundo y Tercero Transitorio de dicha reforma; y de conformidad con las atribuciones conferidas en el Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, consultable en la página oficial <http://comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2017/MOE-CGAJDH-2017.pdf>, por lo que adquiere la categoría de hecho notorio de conformidad con la Jurisprudencia XX.2o. J/24¹, y en términos del oficio de representación presidencial número 5.AP/ARP/732/2019, de fecha 17 de enero de 2019, emitido por el C. Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con fundamento en los artículos Segundo y Cuarto, ambos del "ACUERDO General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic.), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de febrero de 2014, recibido el día 18 de enero de 2019, en la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud; ante usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

En atención al oficio número 682/2018, que contiene inserto el proveído de fecha 16 de enero de 2019, con el que se admite la demanda de amparo y requiere a autoridad que represento para que rinda su informe de ley; de conformidad a lo dispuesto en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, **rindo el informe justificado** solicitado al tenor de lo siguiente:

ACTOS RECLAMADOS.

ÚNICAMENTE ES CIERTO que el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, promulgó el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017.

El C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos no ha realizado acto alguno que puede constituirse como un efecto, consecuencia o aplicación del contenido de los artículos tildados como anticonstitucionales de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; situación que se corrobora de la simple lectura que se realice a la demanda de amparo, pues de la misma se advierte que la propia parte quejosa manifiesta la existencia de la resolución sobre su solicitud de autorización para el procesamiento industrial para la obtención de canabidiol o CBD, acto que atribuye a una autoridad diversa a mi representado,

¹ Jurisprudencia XX.2o. J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIX. enero de 2009. página 2470, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" (sic).

676

ESCANEADO

12 FEB 2019



es decir, al Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE SE ADMITE.

La autoridad señalada como responsable, C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, no viola los derechos fundamentales a que alude la parte quejosa en su demanda de amparo, toda vez que la promulgación DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicho acto está ubicado en el marco constitucional y en consecuencia se deberá sobreseer, o en su caso, negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Por lo anterior, suponiendo sin conceder, que se llegará a otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, se hace notar a su Señoría que los efectos de la sentencia protectora no alcanzarían a vincular a la autoridad que represento, por cuanto hace a la promulgación que realizó, en consecuencia, no lo obligaría a dejar insubsistente sus actos, pues la sentencia de amparo no afectaría la vigencia de las normas cuestionadas, ni las privaría de eficacia general.

Sirve de apoyo, la tesis número P. CXXXVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 200006 del IUS y en la página 135, Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general."

Asimismo, cobra aplicación la tesis número 2a. CXV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 197512 del IUS y en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra indica:

"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SÓLO EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo."

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.



Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se comunica a su Señoría que en relación con los actos reclamados, procede el sobreseimiento de acuerdo a lo siguiente:

Primero. Respecto del acto que se ha aceptado, consistente en la promulgación del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones VI y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal.

Lo anterior toda vez que, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa aduzca en contra de la promulgación del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, algún vicio de inconstitucionalidad, esto es, omite formular conceptos de violación en contra de tal acto.

En efecto, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio constitucional deviene improcedente cuando en la demanda no se señalan los dispositivos constitucionales que contengan los derechos fundamentales que los peticionarios de tutela constitucional estima se violan en su contra, así como los razonamientos lógico-jurídicos del por qué, según la parte quejosa, se violan dichos derechos (conceptos de violación).

En ese orden de ideas, si bien la parte quejosa refiere como acto reclamado la promulgación de la Ley General de Salud, misma que contiene los artículos impugnados 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo.

Concluyendo entonces se puede decir que si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de la promulgación de las disposiciones legales, señalando como autoridad responsable a aquella que ordenó su publicación, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta vulnera algún precepto constitucional, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia que aquí se hace valer; debiéndose declarar el sobreseimiento en el juicio de amparo en lo que a tal acto y autoridad se refiere.

Sirve de apoyo la tesis emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 238238 del IUS y en la página 63, del Volumen 91-96, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica:

"CONCEPTOS DE VIOLACION. NO EXPRESADOS, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Que el particular quejoso no exprese en la demanda ningún concepto de violación enderezado a impugnar el procedimiento que reclama, es causa de improcedencia al no ser posible, jurídicamente, hacer el examen de la constitucionalidad de dicho acto en caso de que el promovente sea un particular, en que el asunto es de estricto derecho; por ello se debe sobreseer el juicio y no pronunciar sentencia negando el amparo."

Del mismo modo resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia número 3a./J. 28/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 206659 del IUS y en la página 38, del número 72, diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que indica:

"CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."

Segundo. Se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 73, párrafo primero, ambos del ordenamiento legal citado con anterioridad y artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior en atención a las consideraciones que a continuación se expresan.



Del análisis conjunto de tales preceptos, se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando dicha situación resulte de alguna disposición contenida en la Constitución o en la propia Ley de Amparo, por lo que el juicio de amparo donde se actualice tal circunstancia deberá sobreseerse. Asimismo, se deduce que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales.

En ese sentido es inconcuso que resulta improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional a la parte quejosa, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada.

Por lo anterior, es que si en el presente juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, bajo el argumento total de que dicha normativa constituye la política prohibicionista e inconstitucional del Estado Mexicano para producir productos de cannabis sativa L, es que se revela y colige que la pretensión de la parte quejosa derivaría en que se subsane dicho bloque normativo impugnado, a efecto de que al otorgarse el amparo dicha normativa sea modificada; de ahí que en consecuencia el presente juicio de amparo sea improcedente.

En efecto, la parte quejosa pretende que se le otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que en la Ley General de Salud, sea permisible la autorización para el productos de "*cannabis sativa L*" y el psicotrópico "*THC*" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$, $\Delta 10$ (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "*mariguana*", así como para ejercer los derechos de la misma, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y en general todo acto relacionado con su producción.

Por lo que se considera que el efecto en sí sería desvirtuar la voluntad del legislador cuando expidió la Ley General de Salud, cuyo objetivo fue reglamentar el derecho a la protección de la salud.² Al respecto, entre las finalidades previstas en la propia ley se señaló "*la promoción del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades*" (fracción I del artículo 2o). De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado "*control sanitario*" de los psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor.³

Ahora bien, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; de ahí que resulte improcedente los efectos para los cuales la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

En efecto, el principio de relatividad impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa violación, es decir, no se le puede obligar a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación o modificación de una ley, que constituye una regla de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al peticionario de amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada o modificada, **lo que resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.**

En el caso en particular, de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, traería como efecto que se ordenara a la responsable reparar la omisión de la Ley impugnada por este medio, mediante la inclusión de una disposición menos rígida. Con lo anterior, **se le daría efectos generales a la ejecutoria**, ya que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la Ley General de Salud, lo que pugnaría con el principio de relatividad de las sentencias de amparo.

² Esta ley sustituyó al antiguo Código Sanitario y se promulgó el 7 de febrero de 1984. Desde esa fecha no se han reformado los artículos 235 y 237, los cuales fueron impugnados por los quejosos.

³ Así se advierte de la exposición de motivos de dicha ley, y sus correspondientes dictámenes legislativos. Al respecto, véase: Exposición de Motivos, Cámara de Origen: Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 15 de Noviembre de 1983 de la Iniciativa de la Ley General de Salud.



Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis número P. CLXVIII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 197222 del IUS y en la página 180, del Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

"LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motiva, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado."

Tercero. Respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, es improcedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en virtud de que el otorgamiento implicaría múltiples violaciones a los derechos de la sociedad general, así como a diversos ordenamientos legales. Lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, 1, 4, 15, 76, fracción I, 89, fracción X, 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que su concesión sería nugatoria para el quejoso ante la inexistencia de una plataforma política integral para autorizar el uso de cannabis sativa L, tal y como a continuación se expone.

De los anteriores ordenamientos legales se advierte lo siguiente:

- Que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
- Que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
- Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
- Que es facultad exclusiva del Senado, entre otras, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
- Que es facultad y obligación del Presidente de la República, entre otros, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
- Que en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:
 - Autodeterminación de los pueblos.
 - No intervención.
 - Solución pacífica de controversias.
 - Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
 - Igualdad jurídica de los Estados.
 - Cooperación internacional para el desarrollo.
 - Respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
 - Lucha por la paz y la seguridad internacionales.



- Que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
- Que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Asimismo que en la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente, se dejó claro que un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios, en el cual se estableció:

(...)

En ese sentido, el juicio de amparo tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado.

Un presupuesto básico de la democracia es la dignidad de la persona humana, racional y libre, garantizada a través de un catálogo de derechos, valores y principios tales como la libertad, igualdad y pluralidad, que estén reconocidos en una Constitución o Norma Fundamental, los cuales deben ser garantizados y protegidos ante su desconocimiento a través de los instrumentos jurisdiccionales que la propia Constitución prevea.

(...)

Es en ese sentido de que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

(...)

Asimismo, que actualmente la política pública en relación con los efectos por consumo de cannabis sativa se encuentra prohibida e incluso tipificado como delito su adquisición, comercialización u obtención por cualquier vía por los efectos que genera el Tetrahidrocannabinol (THC). Lo anterior, es así ya que tanto en la Ley General de Salud, como en el Código Penal Federal, prevalecen otras infracciones administrativas y penales que necesariamente tendrían que cometerse para que en el caso que nos ocupa, el amparo pueda surtir efectos, pues no existe hoy día una autorización para poseer drogas como la cannabis en cantidades mínimas y necesarias para el consumo personal e inmediato, sólo puede concluirse que implícitamente se tolera o permite la adquisición ilícita del producto a consumir (artículos 192, 477, 478 y 479, todos de la Ley General de Salud).

En este entendido, resulta evidente que en el sistema penal vigente, la posesión de marihuana, aún en cantidades mínimas (hasta 5 gr.), sigue constituyendo una conducta típica de delito, y que si bien, de acreditarse que el poseedor es farmacodependiente o consumidor, el Ministerio Público no ejercerá acción penal, ello sólo implica la existencia de una excluyente de responsabilidad que debe probarse, pero de ninguna forma una autorización para consumir marihuana o para adquirir la misma o su semilla.

Asimismo, dicha droga es regulada, entre otros ordenamientos legales, en los siguientes:

- Títulos Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Ley General de Salud, relativos a autorizaciones y vigilancia sanitaria.
- Código Penal Federal, en sus artículos 84, fracción III, inciso c), y 90, fracción II, inciso d), 194, 195, y 195 bis, fracción II.
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2, fracción I, y otros.
- Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972.
- Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
- Convención de las Naciones Unidas en contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
- "NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones".

En consecuencia, una concesión del amparo, acorde a lo estrictamente solicitado por el quejoso, en nada le beneficiaría, pues podría implicar la comisión de uno o más delitos, o cuando menos, la continuación de los efectos de delitos ya cometidos, así como violación a diversos ordenamientos legales administrativos, e incluso internacionales. Ello, porque aunque se autorice la siembra o cosecha de marihuana, la obtención de una semilla, que resulta indispensable para dichos procesos, sigue constituyendo un ilícito.

En suma, no es material y jurídicamente viable cumplir una ejecutoria de amparo, si el presupuesto necesario para garantizar la producción de cannabis sativa, conlleva la comisión de un delito por parte de quienes vendan, suministren o entreguen por cualquier medio dicha droga o su semilla a quien la consumirá; la posible comisión de delitos por parte del



propio accionante de amparo al recibir la droga o la semilla necesaria para su siembra y cosecha, e incluso, la eventual comisión de ilícitos diversos por parte de la autoridad que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Ante las circunstancias expuestas, no es permisible conceder el amparo al quejoso, ya que se insiste, el presupuesto necesario para que pudiera, en su caso, realizar los procesos para los que se solicita el amparo, derivados de la propia demanda, consistentes expresamente en sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, **implicarían necesariamente la comisión previa de uno o más de los delitos previstos en normas punitivas no impugnadas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal**, esto es así ya que a la fecha no se encuentra regulada la forma lícita para adquirir, importar, ni acceder a la cannabis sativa o a su semilla, y al no existir una regulación específica para uso, al permitir esta conducta, **no se garantiza la protección de terceros, incluida el núcleo esencial de la sociedad mexicana, la familia.**

A mayor abundamiento, sólo podría sembrarse, cultivarse y cosecharse marihuana, si existe como presupuesto la obtención de una semilla de dicha planta, a la vez que sólo podría prepararse, poseerse o transportarse la misma, si existe como presupuesto la adquisición o importación de dicha planta, conductas que finalmente, siguen constituyendo ilícitos penales previstos en normas que no fueron impugnadas ni por tanto, materia de análisis en el presente juicio.

De ahí que, si para sembrar o realizar cualquiera de las conductas planteadas por el solicitante del amparo, debe previamente cometerse un delito por el quejoso o por quienes le provean la marihuana o su semilla, e incluso infringir tratados internacionales, resulta inconcuso que existe un impedimento grave para la emisión de un pronunciamiento de orden constitucional. El artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el presente asunto en caso de concederse el amparo a los quejosos, no quedan exentos de la comisión de un delito quienes les provean de la droga, ni el propio quejoso.

A la vez, un principio del juicio de amparo, es que no puede archiversse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, lo que así se ordena en la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. En esos términos, sólo puede concederse la protección de la justicia federal a partir del juicio de amparo, mediante una sentencia que sea de posible cumplimiento, por lo que si la ejecutoria de amparo se dictara en el extremo de ordenar algo que conllevará la comisión de un delito o la continuación de sus efectos, ello destruiría de origen la posibilidad de conocer de un juicio con dichas implicaciones.

Es decir, si una persona solicita autorización para sembrar, cosechar, poseer, transportar y cannabis sativa, es de suponerse que ya cuenta con la misma o que eventualmente accederá a la misma para poder realizar dichos actos; pero si a la fecha, no existe vía lícita de adquisición de la marihuana o de su semilla, luego entonces, resulta jurídicamente imposible restituirlo en el goce del derecho a realizar diversas actividades comerciales e industriales cuando no se garantice que el Tetrahidocannabinol (THC) sea de una concentración menor al 1%, pues superior a esta genera efectos psicotropicos.

El artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXIII, señala que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley citada, por lo que si el propio artículo 214 de la propia ley, señala que no puede archiversse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución, en el caso, nos encontramos ante un supuesto que actualiza dicha improcedencia.

Así, si en el caso, la materia para la ejecución de la sentencia dictada, es que se ordene el otorgamiento de una autorización para diversos actos relativos a producir cannabis sativa, a la que hoy, sólo puede accederse ilícitamente, luego entonces, **es de concluir que la parte quejosa no podrá ejercer el derecho que solicita, o al menos, no dentro de la ley, pues sigue penalizada la adquisición de marihuana**, así como todas las posibles vías para que acceda al narcótico o a su semilla.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que dicha imposibilidad también deriva del contenido del artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece como facultad del C. Presidente de la República celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en el caso en particular, nuestra país ha signado diversos convenios en materia de drogas, en los cuales se incluye la marihuana, de tal manera que, constitucionalmente, sólo el Presidente de la República es el único facultado para suspender o modificar dichos convenios.

México es parte del "Sistema Internacional de Control de Drogas" (SICD), que se encuentra respaldado por tres tratados internacionales, a saber:



- La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961;
- La Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y
- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Respecto la Convención Única sobre Estupefacientes, enmendada por el protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única, vale mencionar que ha influido en las leyes sobre prohibición de drogas en todo el planeta. Actualmente, cerca de 153 países han ratificado este instrumento y lo han incorporado a su derecho nacional. Las finalidades de la Convención Única son: "(...) *limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos (...)*" (sic.). Este tratado dispone de un marco conceptual de sustancias sujetas a control, entre las que se encuentran el **cannabis**, la hoja de coca, el opio, etcétera.

La Convención Única contempla a dos organismos internacionales especializados de llevar a cabo el control de las sustancias: La Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico Social y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entre las funciones de la primera, destacan la modificación de las listas de estupefacientes y la emisión de recomendaciones; en contraste, las funciones de la segunda versan con la comprobación de obligaciones para limitar el cultivo, la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes para fines médicos y científicos. **En caso de incumplimiento, la Junta Internacional de Fiscalización puede ejercer sus facultades para solicitar explicaciones a un gobierno** cuando considere que la convención corre un grave peligro porque un país o territorio no ha cumplido con el tratado.

En segundo lugar, tenemos la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Este tratado incluyó nuevas sustancias en un listado de cuatro tablas y su propósito es limitar a fines médicos y científicos, la fabricación, exportación, importación, distribución, existencias, comercio, así como el uso y posesión de las sustancias de psicotrópicas.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, misma que ya contempla una obligación para los Estados que sean parte de dicho tratado de: "(...) *adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal (...)*" (sic.).

Bajo tal contexto, resulta improcedente el presente juicio de amparo que tiene por objeto declarar inconstitucionales varios de los artículos de la Ley General de Salud, que apuntalan la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de emitir autorizaciones para la realización de una serie de conductas relacionadas con el consumo personal de marihuana con fines recreativos. De ahí que sus efectos rebasen los fines médicos y científicos a los que alude el SICD; particularmente la Convención Única de 1961 y la Convención de Estupefacientes de 1988. Por lo tanto, es de advertir que, **de concederse el amparo al quejoso, dicha acción genera el incumplimiento de obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.**

Cuarto. En relación con los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, considerando que la hoy quejosa carece de interés jurídico o legítimo, de conformidad con en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

Lo anterior, ya que si bien la parte quejosa manifiesta que se ve afectado por la actuación de la autoridad ejecutora que señala como responsable, pues a su decir se le veda su derecho dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, al negarle la autorización para el diversos actos de producción de cannabis sativa con fines productivos, lo cierto es que de la lectura de la demanda a decir del quejoso el oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, **los referidos artículos son declarativos en cuanto citan la imposibilidad para otorgar la autorización solicitada.**

En efecto, del contenido del oficio impugnado se deduce que la autoridad señalada como responsable, informó que "... se observa que al no haber permisión expresa en la Ley General de Salud, pero si limitación en el Código Penal Federal, el cultivo será permisible únicamente para fines médicos y científicos, toda vez que la legislación vigente no prevé la posibilidad de llevar a cabo algunas de las actividades solicitadas en su escrito de petición y que se enumeran en los incisos a, b, c y d del presente oficio. En ese sentido se niega la autorización solicitada para llevar a cabo todas y cada una de las actividades mencionadas." (Sic), sin que lo anterior implique una aplicación en perjuicio del impetrante de amparo de los preceptos legales tildados de inconstitucionales por los motivos que expone o que haya sido consecuencia de que se trata de sustancias prohibidas.



112

Lo anterior es así, pues el mismo oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se informa al hoy quejoso lo siguiente: ***"No omito manifestarle que si su interés es fabricar o comercializar productos con CBD, es posible tramitar ante esta Autoridad la evaluación sanitaria a través de la cual se puede lograr la importación de materias primas con CBD, siempre que las mismas contengan menos de 1% de THC"*** (Sic)

Por lo tanto, los artículos impugnados, necesitan de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio a la parte quejosa, cuestión que no acontece en el presente asunto, porque no es suficiente que en el contenido del oficio reclamado se citen los preceptos impugnados para estimar su aplicación sino que es necesario que su contenido sea el sustento del acto desplegado por la autoridad, cuestión que no se da en el caso, porque la comunicación citada no tiene como base la existencia de la prohibición expresa contenida en los artículos citados.

De lo anterior es evidente que a decir del quejoso el oficio número 183300EL040837, de fecha 17 de diciembre de 2018, emitido por el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, no se aplicaron los artículos que tilda de inconstitucionales, por ende, es inconcuso que los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, no producen una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso.

En efecto, al controvertirse la constitucionalidad de ciertas normas es indispensable que el juzgador analice el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica y legítima del quejoso, para así poder determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en los dispositivos impugnados, lo que en su caso le permitirá concluir que éste sí afecta su interés legítimo y, por tanto, resulta procedente su impugnación.

Por tanto, al no acreditarse la existencia de un acto de aplicación de los multicitados artículos que tilda de inconstitucionales, es inconcuso que la normatividad impugnada de manera directa alguna afecte de forma actual e inminente la esfera jurídica del peticionario de amparo, por lo que no es procedente analizar su constitucionalidad, al reunir las características de una norma heteroaplicativa.

Lo así razonado encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 159929, página 812, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época, de rubro siguiente: **"LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN."**

Quinto. Respecto de los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo reclamados, se destaca a su Señoría que procede dictar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 107, fracción I, todos del ordenamiento legal citado con anterioridad. En efecto, tales disposiciones normativas establecen lo siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

(...)



XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

(...)

(El énfasis es propio)

De la transcripción anterior se obtiene que el legislador hizo la distinción para la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico de la parte quejosa, entre aquellas normas generales que causan perjuicio por su sola entrada en vigor y aquellas que para que entrañen una afectación en la esfera de derechos del gobernado, requieran irreductiblemente de un acto posterior de aplicación.

Además, los artículos transcritos evidencian dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, a saber: que la disposición relativa se reclama a partir de su entrada en vigor; o bien que se reclame con motivo del primer acto de aplicación, siempre y cuando en ambos casos se irrogue perjuicio al quejoso.

En el primer supuesto, cuando se reclama la disposición normativa por su sola entrada en vigor, esto es, en su carácter de autoaplicativa, para acreditar el interés que permita reclamar tal acto, el quejoso debe demostrar que se ubica en la hipótesis de la norma reclamada, es decir, que obligue a hacer o dejar de hacer una determinada conducta, lo cual le irrogaría un perjuicio, sin que sea necesario un acto de aplicación por parte de la autoridad.

Para precisar la manera en que se han de distinguir las disposiciones que por su sola vigencia causan perjuicio (autoaplicativas), así como aquellas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativas), es conveniente transcribir el contenido de la tesis de Jurisprudencia número P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 198200 del IUS y en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: **"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."**

Conforme al criterio jurisprudencial indicado, para distinguir cuándo se está en presencia de normas autoaplicativas o heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, que atiende a la manera en que se producen los efectos de la disposición impugnada, ya sea que éstos se actualicen de manera inmediata, o bien que para hacerlo se requiera de algún acto o evento (condición) que origine la actualización de la norma. Por lo que se concluye, que cuando se reclama la ley por considerarla como autoaplicativa es necesario demostrar que los efectos de la disposición impugnada irrogan una afectación en la esfera de derechos del gobernado que se actualiza de manera inmediata a partir de su entrada en vigor. Consecuentemente, si la norma en cuestión prevé alguna carga u obligación para el particular, pero el nacimiento de esa carga u obligación depende de alguna condición prevista en la ley, es claro que se está en presencia de una norma heteroaplicativa.

En el caso, la parte quejosa reclama los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, **como autoaplicativos**, pues considera que dichos preceptos legales afectan su esfera de derechos para el realizar diversos actos de producción con cannabis sativa. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que dichas disposiciones legales tildadas de inconstitucionalidad, **no vinculan al accionante de garantías a su cumplimiento ya que no crea, transforma o extingue la situación concreta de derecho de la quejosa**, aunado de que requieren de la actualización de una condición, por lo que es permisible afirmar que el acto admitido por mi representada, tiene el carácter de heteroaplicativo, sin que a la fecha exista un acto concreto de aplicación.

Esto es así ya que para determinar la aplicación de lo dispuesto por los preceptos normativos en cita, resulta indispensable que la parte quejosa acreditara haber realizado una solicitud relacionada con los actos que implican los preceptos legales reclamados y derivado de ello se le hubieran negado, lo cual no se acredita ni indiciariamente en el presente caso. Sin embargo en el caso en particular, la quejosa no acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, **debido a que deja de demostrar de manera fehaciente haber solicitado una autorización para los actos que pretende y para los que involucran los preceptos legales reformados y adicionados que reclama, ante alguna autoridad**



gubernamental administrativa o sanitaria, sin que sea óbice citar que el oficio que señala como acto de aplicación fue emitido posterior a la reforma citada de la Ley General de Salud.

Por lo que se concluye que con la promulgación reclamada, no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, debiéndose sobreseer o en su caso negar el la concesión del amparo, **máxime si no se encuentra plenamente probado el acto de aplicación de la norma.** Corroboró lo manifestado en las líneas que anteceden, la tesis número II.3o.C.3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el registro 191475 del IUS y en la página 1205, del tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: **"LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN."**

IMPUGNACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

Único. Son infundados los conceptos de violación hecho valor por la parte quejosa y en los que, analizados en su conjunto, en esencia refieren que el Subdirector Ejecutivo de Legislación y Consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le negó el permiso para diversos actos relacionados para producir productos de cannabis sativa L, por lo que reclama la inconstitucionalidad de los artículos, artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235 Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, los cuales a su decir, vulneran sus derechos fundamentales de seguridad jurídica libre industria. Asimismo, continúa señalando que, dichas disposiciones legales, implican una restricción inconstitucional e ilegítima, esto es así ya que a su consideración la medida adoptada en la Ley General de Salud es excesiva.

El quejoso considera que se da un trato desigual, discriminatorio y desproporcional a las sustancias derivadas del Cannabis Sativa L, porque lo que pretende es producir diversos productos que contengan una concentración de menos del 1% de tetrahidocannabinol (THC), con relación a las autorizaciones sanitarias que permite esta concentración pero que su uso sea para fines médicos o científicos pues la prohibición de dichos productos desemboca en la incongruencia de la finalidad de la ley, pues su finalidad de la Ley es la de proteger la salud de la población de los efectos nocivos de los psicotrópicos y estupefacientes, pero por otro lado prohíbe a su parecer la producción de cualquier producto de cannabis sativa L. Asimismo, continúa señalando que, dichas disposiciones legales, implican una restricción inconstitucional e ilegítima, esto es así ya que a su consideración las medidas adoptadas en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal son excesivas.

Lo anterior no implica de modo alguno que el derecho al trabajo e industria, establecido y entendido como una premisa mayor dentro del orden jurídico nacional, elimine cualquier posibilidad de intervención estatal, sobre todo cuando estamos frente a una sustancia como como el THC que produce una afectación en la salud de las personas; puesto que de lo contrario, centrarse en la "no intervención estatal" frente a las libertades individuales, imposibilitaría para el Estado asumir y desarrollar un enfoque de salud pública, indispensable para proteger debidamente los derechos humanos de la población en general, y el derecho a la salud en particular.

Máxime que es de advertir que del propio contenido normativo impugnado, no se desprende que establezcan supuestos jurídicos que afecten el derecho de las personas a decidir, en forma libre, sobre la manera en la que quieren mostrarse frente a los demás (derecho a la propia imagen).

Además, aun cuando se considerara que la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece a la esfera de autonomía personal, ello no implica necesariamente que las medidas bajo análisis, a partir del contenido general de las disposiciones impugnadas, impliquen una intervención estatal en ese ámbito, puesto que su finalidad se relaciona directamente con la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4o. constitucional, y no con la imposición de un modelo de lo que es correcto, bueno o deseable.

Ahora bien, al interpretar el derecho a la protección a la salud, previsto en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, y no sólo como una declaración de intención, sin poder vinculante sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Es decir, para el Alto Tribunal, el derecho a la salud entraña libertades relacionadas con el control de la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genética; así como derechos tal como el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.



En este sentido, el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que también comprende aspectos relacionados con el buen estado mental y emocional de las personas. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Sustenta lo anterior la tesis número P. XV/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 161331 del IUS y en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, de rubro siguiente: **"DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA."**

Asimismo, se considera aplicable la tesis número 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 169316 del IUS y en la página 457, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época, cuyo rubro expresamente establece: **"DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."**

En el caso en particular, el quejoso refiere violación a la seguridad jurídica y de libre industria en tanto la normatividad impugnada, a su decir, impide o restringe la realización de actos relativos a la siembra, preparación, posesión, transportación y de cannabis sativa L; sin embargo, no debe pasar desapercibido que **dichos derechos no son absolutos, de tal manera que pueden ser limitados con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido.**

Al respecto, resulta importante identificar los límites a este derecho, que han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación con este tema, en el amparo directo 6/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que este derecho **"no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público"**. Como puede observarse, se trata de límites externos al derecho que funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad para perseguir esos fines.

En ese sentido, ningún derecho fundamental es absoluto y por lo tanto todos admiten restricciones; sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria, por lo que para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos:

- a) **Admisibilidad.** La restricción creada por el legislador debe ser admisible conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e idónea para regir en el caso concreto donde se actualiza la medida; es decir, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales en los casos y en las condiciones que el propio ordenamiento Supremo establece, como lo prescribe su artículo 1o. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para fijar limitaciones a derechos fundamentales, adicionales a las que derivan de la norma fundamental, y sus atribuciones de producción normativa sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a aquéllas, que deben ser idóneas y adecuadas para el caso concreto o la necesidad social que determina una regulación.
- b) **Necesidad.** La medida legislativa de carácter restrictivo debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que la fundamentan, porque no basta que la restricción sea en términos amplios, útil para la obtención de ese fin, sino que, de hecho, esa medida debe ser la idónea, óptima e indispensable para su realización. Por ello, el Juez constitucional debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador no pueda alcanzarse razonablemente por otros medios menos restrictivos o intrusivos de derechos fundamentales, dado que las restricciones constitucionalmente previstas a éstos tienen un carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar mano de ellas sólo cuando sea estrictamente necesario; y
- c) **Proporcionalidad.** La medida legislativa debe ser proporcional, lo que implica respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales. Así, el objetivo es que el resultado del balance entre ventajas y desventajas o entre beneficios y costos, siempre derive en un resultado o cociente positivo, si se quiere superavitario, entendiendo que el beneficio supere al daño, a partir de un equilibrio entre las razones pertinentes y que se atiendan en la medida del óptimo posible para casos concretos.

Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales; en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales.



De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Sustenta lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 1a. /J. 2/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 160267 del IUS y en la página 533, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo I, Décima Época, de rubro siguiente: **"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS."**

En ese orden de ideas conviene precisar que las restricciones impuestas en la Ley General de Salud, y que son impugnadas por la parte quejosa, están debidamente justificadas de conformidad con lo que a continuación se demuestra:

1) Son admisibles constitucionalmente.

Tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 237/2014, la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud, es la protección de la salud y el orden público, consagrado en el artículo 4o., párrafos cuarto y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que desde luego incluye el derecho a la salud de los propios consumidores.

Artículo 4º. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federales materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. **Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.** Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De dicha disposición constitucional, se advierte, en primer término, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que especial cuidado merece la salud de los niños y las niñas por ser un sector vulnerable de la población, siendo sus padres o tutores los obligados a preservar tal derecho, estando obligado el Estado a proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de tales derechos.

Así, los ordenamientos legales impugnados de la Ley General de Salud, en tanto y cuanto se dirigen a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general, consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el de los propios consumidores, son constitucionalmente admisibles.

En efecto, la expedición de la Ley General de Salud tuvo como propósito reglamentar el derecho a la protección de la salud. Al respecto, entre las propias finalidades previstas en la propia ley se señaló *"la promoción el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades"* (fracción I del artículo 2o). De esta manera, con el objeto de alcanzar dicho nivel de bienestar, el legislador consideró necesario implementar un adecuado *"control sanitario"* de los estupefacientes, psicotrópicos y narcóticos, bajo la premisa de que su uso constituye un problema para la salud pública en tanto genera dependencia para el consumidor.

Posteriormente se realizaron reformas a diversos preceptos con el objeto de precisar de mejor manera las sustancias que de acuerdo con la ley pueden considerarse estupefacientes o psicotrópicas. Así, el legislador entendió que con dichas precisiones se avanzó en *"dar progresiva efectividad al derecho a la protección de la salud, contenido en el artículo 4o. de nuestra Constitución"*. En esta línea, en la exposición de motivos de la última reforma al artículo 245 de la Ley General de Salud -en la cual se agregaron como psicotrópicas las siguientes sustancias: mefedrona, piperazina, TFMPP, midazolam y K2-, se señaló que *"uno de los problemas de salud pública más serios a nivel internacional es el relativo al consumo y comercialización de drogas, fenómeno que en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, producción y tráfico ilícito de precursores químicos"*.

En este orden de ideas, también se estableció que *"dichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas que ha permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que favorecen su crecimiento"*



desmedido, han generado un problema que debe analizarse desde la perspectiva del impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, dejando sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político”.

Por otro lado, hay que destacar que el actual artículo 1o de Ley General de Salud, dispone que este ordenamiento tiene como objetivo reglamentar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como establecer las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de “salubridad general”. De acuerdo con la propia Ley, este concepto comprende, entre otras cosas, tanto la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos como la existencia de un programa contra la farmacodependencia (fracción XXI del artículo 3o).

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que la finalidad del marco regulatorio para el control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas previsto en la Ley General de Salud (ordenamientos impugnados en el presente juicio de amparo), es la protección a la “salud” y el “orden público”, puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las consecuencias perniciosas derivadas del consumo de las drogas, dado que se ha considerado que esta actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general, por tanto, **ambas finalidades son constitucionalmente válidas.**

2) Son necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional.

Lo anterior porque en el caso en particular está demostrado científicamente que los efectos del consumo de cannabis sativa (indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) así como el psicotrópico THC [tetrahidrocannabinol, los isómeros $\Delta 6a$ (10a), $\Delta 6a$ (7), $\Delta 7$, $\Delta 8$, $\Delta 9$ (11)], y sus variantes estereoquímicas, conjuntamente conocido como marihuana, es perjudicial a la salud física y psíquica de las personas, por lo que prohibir su consumo y las actividades relacionadas con dicha planta, se encuentra válidamente justificada y necesaria para evitar el deterioro a la salud de las personas que la consumen y a la de los consumidores pasivos que inhalan el humo generado del consumo.

En efecto, la exposición a dicha droga entre ellas el consumo es la forma idónea para evitar perjuicios físicos o psíquicos a las personas, toda vez que no hay posibilidad de que exista algo menos restrictivo que dicha prohibición, es decir, no hay forma de evitar el deterioro físico de las personas con el consumo de Cannabis y/o THC, ya que incluso en algunos casos puede tener efectos irreversibles.

Es pertinente hacer referencia a la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)⁴, en la que se expresa que existe gran cantidad de evidencia científica acerca de los efectos en la salud que causa el consumo de marihuana, entre otros, los siguientes:

- Agudos (Presentes durante la intoxicación):
 - Deterioro de la memoria a corto plazo.
 - Alteración de la percepción del tiempo y espacio.
 - Ansiedad.
 - Ideas suicidas.
 - Deterioro de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas.
 - Deterioro de la coordinación motora y el equilibrio.
 - Aumento del ritmo cardíaco, arritmia, infarto, disfunción cardíaca.
 - Episodios psicóticos.
- Persistentes (duran más que la intoxicación pero no siempre son permanentes):
 - Deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje.
 - Deterioro en el sueño.
- A largo plazo (efectos acumulativos del consumo crónico):
 - Aumento en el riesgo de tos crónica y bronquitis.
 - Aumento de sufrir esquizofrenia en personas susceptibles, de empeorar el progreso de la enfermedad o de tener más problemas asociados.
 - Puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional.

⁴ Oficio CONADIC-CNCA-179-09-2016, de fecha 13 de septiembre de 2016. (17 fojas)



Efectos que, indiscutiblemente, **no otorgan al individuo una integridad personal ni lo ayudan a desarrollarse como persona; careciendo por tanto de un óptimo nivel físico y psíquico**; no actúa con libertad, sino impulsado por una fuerza sensitiva, pierde su libre albedrío y está sometido a la fuerza sensitiva. Por ello, con independencia de que los efectos sean de carácter temporal o crónico, finalmente se traducen en un daño o afectación a la salud, que da lugar a considerar idónea la prohibición contenida en nuestro marco jurídico vigente.

Asimismo, aun cuando la producción de cannabis sativa L y generar productos derivados de la misma tengan un fin válido, no constituye un acto indiferente sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general, por lo que la ley debe prohibirlo **cuando las concentraciones de Tetrahidrocannabinol (THC) sean mayores a 1%**, para lograr los fines del Estado Social de Derecho, y evitar se vulnere la dignidad humana. Esto es así, ya que si bien, se puede afirmar que el individuo tiene derecho a hacer uso de su cuerpo como estime conveniente y que los derechos humanos están establecidos en la Constitución, lo cierto es que la libertad individual termina cuando comienza la de otra persona, de tal manera que las libertades e intereses individuales tienen como límite y sujeción el bien común y el supremo interés de la Nación.

Siendo importante resaltar que la prevención no consiste en autorizar de manera lícita el realizar diversos actos relativos al cannabis sativa L, sino en disminuir, moderar, evitar y acotar el deterioro de la salud física, psicológica y social de los usuarios cuando el Tetrahidrocannabinol (THC) sea de una concentración menor al 1%, pues superior a esta genera efectos psicotrópicos.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que la libertad para realizar cualquier actividad y de tomar cualquier decisión, como podría ser llevar a cabo diversos actos para producir cannabis sativa L, y a partir de ello generar diversos productos de tipo industriales, encuentra su límite en los derechos de las demás personas que, también en ejercicio de su autonomía, pueden compartir o no esa actividad, de la manera que la medida resulta idónea no sólo para proteger la salud de los quejados, sino también evitar daños o afecciones a tercero, pues si el cannabis sativa al contener Tetrahidrocannabinol (THC) sea de una concentración superior al 1%, genera efectos psicotrópicos dañinos para la salud.

Asimismo, de la exposición de motivos que da sustento al decreto del 16 de junio de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, **dicha iniciativa tiene como objetivo permitir la preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, o su resina, exclusivamente con fines científicos y médicos, a fin de poner a disposición de los pacientes que lo requieran, los medicamentos que se obtengan de dichas sustancias.**

Luego entonces con la citada reforma se suprime la prohibición contenida en la Ley General de Salud, para la elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con dicha sustancia, exclusivamente cuando dichas conductas se realicen con fines científicos y médicos, lo que en la especie es de resaltar, toda vez que la parte quejosa, no acredita que en la especie se haya aplicado en su perjuicio los artículos 237 párrafo primero, 245 fracciones I, II y IV, 290 y la adición del artículo 235-Bis y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 245 de dicho ordenamiento legal, y del Código Penal Federal en su artículo 198 último párrafo, es decir, la solicitud que realizó a la diversa responsable, fue con el objeto de obtener autorización para el uso del cannabis sativa L, con diversos fines desde importación, siembra, cultivo, procesamiento de cáñamo, comercialización de aceite CBD y adquisición de semillas, los cuales no son para fines científicos o médicos, **por lo que en manera alguna se aplicó los artículos que reclama, y más sin embargo, se le exhorta a que tramite ante la diversa señalada como responsable, una evaluación sanitaria para que logre los actos que pretende de la materias primas CBD siempre que estas contengan menos de 1% de THC**, por lo que no existe una incongruencia entre las disposiciones que reclama para unos industrial y las autorizaciones para uso médico o científico; sin embargo eso no lo exime de acreditar que la autorización que pretende no causara daños a terceros que se vean expuestos a diversos procesos que implican el manejo de cannabis sativa L.

Al respecto, de conformidad con la información proporcionada por el Jefe del División de Servicios ambulatorios Especializados del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, a través del oficio SAP-HPFBA-SSA-DSAE-58-2016, se advierte lo siguiente:

"E) riesgos de accidentes, donde se represente el porcentaje de conductores de vehículos bajo el influjo de marihuana que participaron en accidentes de tránsito.

*Cannabis effects on driving lateral control with and without alcohol
(Efectos del cannabis en el control lateral al conducir con y sin alcohol)
Hartman RL, Brown TL, Milavetz G, Spurgin A, Pierce R, Gorelick DA, Gaffney G, Huestis MA. Drug and Alcohol Dependence 154 (2015) 25/37.*



Los efectos del cannabis, la droga no alcohólica más comúnmente encontrada en los casos de conducción bajo influencia, son ampliamente debatidos. Trataremos de determinar cómo las concentraciones de delta 9-tetrahidrocanabinol se relacionan a alteraciones en la conducción con y con alcohol.

Reducir la conducción bajo la influencia de drogas es una prioridad de los Estados Unidos y a nivel mundial. El cannabis es la droga ilícita más frecuentemente detectada en los conductores, 12.6% de los conductores nocturnos en el fin de semana dieron positivo delta 9-tetrahidrocanabinol en 2013 y 2014 reflejando un aumento del 48% comparado con el 2007

Aunque el tetrahidrocanabinol está asociado a un incremento en el riesgo del choque y culpabilidad en el conductor, los efectos del cannabis en la conducción permanecen ampliamente en debate. El seguir una ruta y la capacidad de permanecer en una línea son habilidades cruciales para conducir. Cambiar de carril, un efecto de conducir bajo el efecto de drogas, es una medida común para evaluar la capacidad de conducir. La desviación estándar de la posición lateral (SDlp) es un indicador del control vehicular altamente sensitivo, sobre todo empleado en investigaciones cuando se conduce bajo el efecto de drogas. En estudios previos se observó que el cannabis incrementa la desviación estándar de la posición lateral y cambiar de carriles, pero los resultados fueron hechos a base de dosis usadas de concentraciones de tetrahidrocanabinol.

A la fecha 23 estados y el DC, aprobaron el uso médico de la marihuana, cuatro estados y el DC legalizaron el consumo de cannabis en adultos. Desde que se legalizó el uso médico de marihuana, el estado de Colorado observó un incremento de casos de conducción bajo la influencia de cannabis y casos de accidentes fatales de vehículos cuyos conductores dieron positivo a cannabis."

De lo que se advierte, que la limitante establecida en los artículos impugnados por la parte quejosa, resultan idóneos ya que se protege a la sociedad en general de consecuencias perniciosas derivadas del consumo de marihuana.

- 3) Son proporcionales, porque el grado de la restricción sobradamente es recompensado por los efectos benéficos que tiene desde una perspectiva preocupada en garantizar la salud de la población en general y en especial la de los menores de edad.

El Instituto Nacional de Salud Pública realizó estudios derivados de los resultados a la Encuesta Nacional de Adicciones de los que se desprende lo siguiente:

- a) Que *"En general existe poca tolerancia social para el consumo de drogas, más de 90% de los varones y de las mujeres afirmaron que sus papás, y 83 y 91% que sus amigos verían mal si ellos o ellas usaran drogas; la percepción sobre la aceptación del consumo entre los jóvenes es mayor, 38% de los varones y la misma proporción de mujeres consideraron que los jóvenes en general ven bien o, con indiferencia, el consumo. Sin embargo, al analizar la relación entre la percepción de aceptación y el consumo de drogas se encuentran diferencias interesantes, siendo más frecuente el uso cuando el menor percibe aceptación social hacia el consumo; solamente 3% de quienes perciben poca tolerancia en sus padres aceptaron consumir drogas, en comparación con 14% de quienes perciben tolerancia; la misma tendencia se observa en relación con la tolerancia por parte de amigos cercanos, 1.8 y 5.2% entre hombres y mujeres, respectivamente." (sic.)*
- b) Que *"Uno de los factores que más consistentemente se ha asociado con el consumo de drogas es la disponibilidad: cada vez más jóvenes experimentan con drogas por tenerlas disponibles en su medio. De hecho los datos de la encuesta señalaron que a 35% de los adolescentes les era fácil obtener drogas y que el riesgo de experimentar con ellas se incrementaba 1.89 veces cuando esto ocurría." (sic.)*

Asimismo, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, se ha pronunciado al respecto, señalando lo que a continuación se detalla:

- a) Hay cifras oficiales que muestran una fuerte asociación entre las conductas ilícitas y el consumo de drogas, pues a escala nacional el 60 por ciento de los delitos son cometidos por consumidores de sustancias psicoactivas.
- b) 95 por ciento de los reclusos en centros penitenciarios del país son consumidores de algún enervante, y sólo 40 por ciento de ellos usaban dos sustancias, en promedio antes de ser apresados, mientras que el resto empezó su consumo en la cárcel.
- c) 65 por ciento de quienes están privados de su libertad son poli-consumidores (ingieren alcohol y al menos dos drogas más), y 55 por ciento de los menores infractores reportan el uso de alguna sustancia ilícita o de bebidas embriagantes.
- d) Asimismo, se tienen datos de que no sólo se carece de la infraestructura médica necesaria para atender la demanda de atención, sino de los recursos económicos suficientes para otorgar a esa población una

⁵ "Consumo de drogas entre adolescentes: resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, 1998", consultable en http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2003/SUPL%201/CONSUMO%20DE%20DROGAS%20ENTRE.pdf



rehabilitación integral. El sistema de salud cuenta con un presupuesto de mil 200 millones de pesos, para atender 112 millones de personas con algún grado de adicción o predisposición.

Bajo esta perspectiva, se razona que por defender la libertad individual, no se puede atropellar los bienes fundamentales de los gobernados como son los derechos a la vida, a la paz, a la salud, a la seguridad, a la convivencia, al bienestar, etcétera; lo anterior es así, ya que no puede haber libertad sin racionalidad.

Aunado a lo anterior, es necesario tomar en consideración los puntos que a continuación se detallan derivados del oficio CONADIC-CNCA-179-09-2016:

- Que el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, son garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo individuo, mismas que no pueden suspenderse ni restringirse.
- La marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo (ONUDD, 2016). También hay indicios de que el número de personas que necesitan tratamiento por consumo de cannabis está aumentando en la mayoría de las regiones (ONUDD, 2015).
- El número de consumidores de drogas que padecen trastornos relacionados con el consumo de cannabis, ha aumentado.
- El consumo de marihuana durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de problemas neuro-conductuales en los bebés; su utilización por parte de mujeres embarazadas podría alterar el sistema endocannabinoide que se está desarrollando en el cerebro del feto causando diversas alteraciones en el funcionamiento cognitivo.
- Los conductores bajo la influencia del cannabis tienen mayor probabilidad de sufrir choques fatales.
- En el ámbito laboral, el consumo se asocia con un aumento en las ausencias, retrasos, accidentes e incapacidades, así como rotación laboral.
- El consumo de la marihuana se asocia fuertemente con la delincuencia juvenil.
- El consumo temprano de cannabis, es un factor de riesgo para presentar conductas delictivas.
- En un escenario en el que México permitiera el uso lúdico o recreativo de la cannabis para adultos que estén legalmente facultados para ello, se puede pronosticar que una parte del producto, es decir de la planta de marihuana, será desviado hacia personas no legalmente facultadas, lo que implicaría la experimentación de la droga a edades cada vez más tempranas
- Se ha registrado que el 60% de los pacientes que llegan a tratamiento para dejar la marihuana son menores de edad, de tal manera que los adolescentes son un grupo especialmente vulnerable ante el consumo de esta sustancia.
- La gravedad del consumo de Cannabis y/o THC en México donde diariamente del 100% de las causas de fallecimiento de las personas, el 7% son atribuibles al consumo de dicha droga (según tabla de CONADIC/SSA/DGAE, Pág. 20), además de ocasionar un perjuicio contra la salud, el medio ambiente y el gasto en salud.
- Que el uso de los productos del cannabis constituye uno de los problemas más importantes de salud pública en el mundo, causando una gran proporción de mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles.
- Que el humo de Cannabis y/o THC de segunda mano, compuesto por más de 6 mil sustancias tóxicas es una grave amenaza para la salud de los no fumadores expuestos, causando enfermedades graves en los adultos y, en particular, en los niños. (Información de CONADIC Pág. 44-45).
- Que la mayoría de los fumadores comienzan a fumar a una edad muy temprana, que no son conscientes del grado y de la naturaleza del daño causado por los productos de Cannabis y/o THC, y que debido a las propiedades adictivas de este y otros componentes son a menudo incapaces de dejar de fumar aun cuando estén sumamente motivados a hacerlo (dependencia).
- Que ningún país puede cubrir lo que cuesta el consumo de Cannabis y/o THC en vidas, así como en recursos financieros que podrían ser reorientados a un sinnúmero de otros problemas de salud urgentes que son menos prevenibles.

Por su parte la C. Directora General Adscrita a la Comisión Nacional Contra las Adicciones, a través del oficio número CONADIC-CNCA-179-09-2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, proporcionó elementos técnicos relacionados con el resultado de la permisibilidad del consumo de marihuana, tal y como se señala a continuación:

"En el 2013 se calculó el gasto en salud ante un posible escenario de legalización de todas las drogas, considerando por mucho la marihuana es la principal droga ilegal consumida en nuestro país, podríamos asumir que una cantidad importante de los siguientes gastos se verían reflejados en nuestro sistema de salud pública actual (Godínez, et al 2013):"

a. La pérdida de productividad (por muertes prematuras hospitalizaciones, asistencia a tratamiento) se duplicaría de 9,771 millones de pesos anuales estimados, a 20 mil millones de pesos.



- b. Los daños a la propiedad por accidentes de tránsito asociados al consumo pasarían de 936 millones de pesos a mil ochocientos millones anuales.
- c. La atención de problemas de salud y tratamiento de adicciones derivados del consumo de drogas ilegales pasarían de un gasto anual estimado de mil millones de pesos a un gasto de 10 mil millones de pesos (incremento del 900%).
- d. La inversión de programas preventivos de reducción de la demanda a nivel nacional se tendría que duplicar de 566 millones de pesos al año a mil millones de pesos anuales." (Sic.)

"8.- El impacto de la legalización de marihuana en Colorado."¹¹

En noviembre de 2012, se aprobó la Enmienda 64 que legalizó la marihuana para uso recreativo para cualquier persona mayor de 21 años.

- El número de muertes de tránsito relacionadas con la marihuana incrementaron 41%, pasaron de un promedio de 59 muertes a 83) de 2009-2012 a 2013-2014 cuando la marihuana para uso recreativo fue legalizada.
- De las personas que conducían bajo la influencia de drogas, se detectó marihuana en combinación con otras sustancias en el 77% de los casos (674) y sólo marihuana en el 41% (354) de los casos.
- En 2013, Colorado se posicionó como el 3er. Estado con mayor uso de marihuana en jóvenes de 12 a 17 años (56% por arriba de la media nacional), comparado con 2006, donde ocupó el 14vo. lugar.
- En ese mismo año, también se posicionó como el 2do. Estado con mayor uso de marihuana en adultos jóvenes de 18 a 25 años, 53.62% por arriba de la media nacional.
- En Colorado, se incrementó en un 40% el número de suspensiones y expulsiones relacionadas con el consumo de drogas en los años 2008-2009 a 2013-2014.
- En 2014, cuando las tiendas de marihuana iniciaron operaciones, la tasa de ingresos a urgencias relacionadas con esta sustancia incrementaron 29%.
- La tasa de ingresos a urgencias en Denver es de 67% mayor que el resto de Colorado y aumentó 25% cuando la marihuana fue legalizada para uso recreativo en 2013.
- Después de la legalización, se registró un incremento del 80% en el número de niños y jóvenes (de 6 a 17 años de edad) expuestos a la marihuana; y un incremento del 138% en niños de 0 a 5 años.
- El Hospital de niños de Colorado reportó un aumento del 700% de 2002-2014, en casos de hospitalización por ingestión de marihuana en niños menores de 12 años (2 casos Vs 16 casos)." (sic.)

Por lo anterior, se hace evidente que la restricción establecida en los artículos impugnados, no sólo es idónea, sino, necesaria y proporcional considerando que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de prever los posibles daños y riesgos que se puedan generar a terceros y a la sociedad, el cual cabe precisar que de acuerdo con los últimos criterios de nuestro máximo Tribunal de alzada, implica que una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados, por lo que es menester contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas.

Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia Tesis: I.7o.A. J/7 (10a.), de la Época, Décima Época, Registro: 2012127, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Página: 1802, cuyo rubro es el siguiente: **DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.**

Conclusiones del concepto de violación.

Del contenido de los artículos 1o, 2o y 3o, fracción XXI, de la Ley General de Salud, se deduce que el objeto de la Ley General de Salud es, entre otros, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos, en este sentido, la constitucionalidad de los artículos impugnados no puede hacerse depender de la situación personal de la parte quejosa, al tratarse de una norma de carácter general, impersonal y abstracta, cuya finalidad es la protección de la salud, entendida como el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.

De esta forma, la prohibición contenida en los artículos impugnados no son arbitrarias, ni caprichosas; no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga a la parte quejosa a revelar aspectos de su vida no conocidos por otros y que, por tanto, cada sujeto puede decidir revelar, esto es, el reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás no se ve violentado con los artículos reclamados, en virtud de que éstos no interfieren en el poder de decisión del quejoso sobre datos relativos a su persona, quedando intocada la disponibilidad sobre su vida y decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás.

Tampoco se vulnera en perjuicio de ninguna persona el libre desarrollo de la personalidad, pues las normas impugnadas no limitan en forma alguna la libertad de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.



117

De igual forma, no existe violación a la intimidad de ninguna persona, pues los numerales que se consideran inconstitucionales no pretende coartar su libertad de decidir qué aspectos de su vida deciden revelar, pues la disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede revelar de su intimidad a los demás no se ve afectada, sin que ello signifique ocultar información, sino que puedan desarrollar su vida con libertad y con la posibilidad de resolver, a voluntad propia, qué aspectos de su vida admiten exponer al conocimiento de otros, para salvaguardar su dignidad humana.

Ciertamente, en el caso, no se observa que los principios de identidad personal, intimidad, imagen y desarrollo de la personalidad que se encuentran ligados al derecho fundamental de la dignidad humana se encuentren limitados o vulnerados, pues la finalidad de los preceptos legales que nos ocupan, como quedó establecido en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, es de dar cumplimiento a la obligación del Estado de proteger la salud de toda persona en términos del artículo 4o constitucional, bajo el respeto de la dignidad humana de las personas, evitando trasgresiones al orden público, **preservando derechos de terceros y del orden público**, pues el individuo tiene y conserva el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen.

De concluir que las normas impugnadas atentan contra la dignidad humana y cualquiera de los derechos fundamentales de los gobernados, entonces, no sería razonable la prohibición contenida en los mismos, trátase de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, pues debe tenerse en cuenta que la protección de la salud, en definitiva, es una previsión constitucional sobradamente importante para operar como objetivo justificador de la limitación a la libertad de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga.

Así la dignidad humana, está situada en casi cualquiera de sus ámbitos de ejercicio en el centro de un entramado regulatorio muy intenso, destinado a garantizar ése y otros muchos contenidos constitucionalmente relevantes, cuya protección se vería puesta en peligro por un ejercicio de la misma no debidamente limitado desde la perspectiva de objetivos e intereses públicos como los que las provisiones legislativas impugnadas sitúan en el centro de sus propósitos.

Entonces, contrario a lo señalado por la parte quejosa, no existe violación al derecho fundamental de la dignidad humana en perjuicio de persona alguna, reclamado éste con los principios de personalidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, pues como quedó señalado, en la exposición de motivos de la Ley General de Salud, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

En este orden, es obligación del Estado proporcionar a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, como en el caso, de las adicciones y la lucha contra ellas, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, derecho que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud.

Además, cabe recordar, que el Estado tiene la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud, así el fin inmediato del Estado es proveer de salud en las mejores condiciones posibles, y la impetrante de garantías pretende defender el derecho a la seguridad jurídica, industria y trabajo, amén de tomar en cuenta que **el los efectos de cannabis sativa L primeramente deben garantizar concentraciones menores a 1% de Tetrahidrocannabinol (THC) en función de su concentración**; de ahí que la restricción contenida en los artículos impugnados debe considerarse como constitucionalmente válida, ya que en términos del artículo 3º de la Ley General de Salud, **es obligación del Estado la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos**.

De modo que el propósito último de tales disposiciones reside no sólo en contribuir al bienestar físico y mental del hombre, **sino evitar que se genere la proliferación de sustancias nocivas**, lo que es justificable con el fin que se pretende, ya que la autorización para su producción, puede generar afectación a la sociedad en general, es decir, la disminución en los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de las condiciones de salud.

La salud es una necesidad primordial en la vida de las personas, como sustento para el pleno desarrollo de las capacidades humanas, tanto físicas como intelectuales; por tanto, la salud es imprescindible en la realización personal que se logra mediante la convivencia armónica, el trabajo, la educación, la cultura y el entretenimiento, en otras palabras, es el primer requisito para el bienestar.



La salud es un derecho fundamental del ser humano, el uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, entidades federativas y la sociedad en general, de ahí que contrario a lo señalado por la parte quejosa, sea necesario mantener un estricto control en su manejo a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que puede causar problemas tan graves como la drogadicción.

Además, en sentido contrario a lo que aducen la parte quejosa, los preceptos que impugna, si bien es cierto establecen una prohibición, ésta se sujeta al principio de menor restricción, ya que no todos los habitantes del país requieren consumir cannabis o marihuana y sí, por el contrario, necesitan que se garantice su salud, de modo que la afectación que la peticionaria de amparo pudieran resentir, encuentra justificación constitucional.

El derecho de acceso a la salud se relaciona directamente con el derecho de autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia, porque, se reitera, la obligación del Estado es la de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

En relación a que existen alternativas menos gravosas que permitirían alcanzar los fines del Estado, y que son menos restrictivas de los derechos a la autodeterminación, libertad individual y corporal, libre desarrollo de personalidad, identidad personal y disposición de la salud propia y que darían mejores resultados en la consecución del fin perseguido por el Estado; pero, contrario a lo aducido por la impetrante, no hay motivos para reprochar la opción del legislador construida sobre la base de la prohibición reclamada, que permitan establecer que la medida no es proporcional para alcanzar los resultados deseados, en virtud de que el nivel de protección contra las adicciones es claramente más alto que lo pretendido por la accionante de amparo.

Además, cabe señalar que el quejoso parte de un premisa errónea, pues considera como un derecho la siembra, cultivo, preparación de medicamentos a base de marihuana; sin embargo, la prohibición contenida en los artículos impugnados es constitucionalmente válida, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, lo han constituido como un derecho; por tanto, los artículos impugnados no son inconstitucionales, en virtud de que no se puede hablar de una restricción de un derecho cuando éste no existe como tal, de ahí que contrario a lo señalado por el quejoso, los artículos impugnados no deban cumplirse con los requisitos necesarios para restringir un derecho.

De conformidad con el artículo 4o. Constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, tanto física como mental y no como lo plantean los demandantes, el derecho a disponer de la salud personal, inclusive para no gozar de buena salud. En este sentido, la acción del Estado debe estar encaminada a ayudarle a la población a proteger su salud y no a facilitarle que con el uso de una sustancia tóxica que es dañina para su organismo y para su mente, perpetúe el daño a su salud, pues contravendría tanto nuestra Carta Magna, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros ordenamientos legales, e incluso los criterios jurisprudenciales pronunciados por el Máximo Tribunal Constitucional en éste sentido, cuyos rubros son **"DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD."** y **"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL."**, que en resumen establecen que el derecho a la protección de la salud es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados.

Es decir, el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad, cuyo contenido e interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Así, se observa de los siguientes ordenamientos: el párrafo 1º, del artículo 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como *"Protocolo de San Salvador"*; 6, 24, 25 y 26, de la Convención sobre los derechos del niño; que han establecido entre otros de los puntos a destacar, lo siguiente:

- a) Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
- b) Que los Estados Parte en dichos Pactos, Tratados y Convenciones, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social.



- c) La reducción de la mortalidad y de la morbilidad infantil, y el sano desarrollo de los niños.
- d) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
- e) El reconocimiento por parte de los Estados, del derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de la salud.

Es necesario traer a colación que en el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se reformaron, entre otros, el artículo 1o de la Constitución Política, incorporando al texto constitucional la protección de los derechos humanos reconocidos tanto en dicha Ley Suprema como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Para optimizar la aplicación de dicha enmienda, el Constituyente puntualizó en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o de la Constitución Política, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Luego entonces, todas las autoridades del país deben atender a cabalidad y proteger los derechos humanos de los habitantes de México, como una obligación inherente, en términos del artículo 1º Constitucional y acorde al contenido de la tesis número P. LXI/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro 163169 del IUS y en la página 24, del Tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO. El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas, como son las tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de privación de la vida."

En este orden, la protección del derecho a la salud, exige entre otras de las obligaciones de los Estados, que para garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo.

Lo mismo se desprende de la Observación General No. 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la cual no es una mera declaratoria, sino que constituye una obligación de hacer para el Estado Mexicano al ser uno de los 51 miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, que firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, dicha disposición establece lo siguiente:

"Observación General No. 14
(...)"

33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligación a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directamente o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud."

De tal forma que, en cumplimiento al artículo 4o constitucional y los diversos ordenamientos internacionales que México ha suscrito, entre ellos los citados por el propio impetrante de amparo, el poder legislativo emitió los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción II, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, en donde se respeta el derecho a la



salud, ya que se protege a la sociedad, previniendo e inhibiendo la venta de marihuana que ocasiona daños fatales e incluso irreversibles a largo plazo.

No existe duda alguna de que toda persona, sin distinción, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, constituye emanación directa y principal del principio de dignidad humana; sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros, tal y como la Corte Colombiana en su resolución T-565/13, determinó que el libre desarrollo de la personalidad tiene ciertos límites.

Con el fin de determinar qué tipo de limitaciones al libre desarrollo de la personalidad resultan constitucionalmente admisibles, la jurisprudencia colombiana parte de distinguir dos tipos de actuaciones del sujeto que son susceptibles de un escrutinio igualmente diferenciado, a saber:

- En primer lugar, están aquellos comportamientos que solo conciernen a la persona y que, por ende, no interfieren en la eficacia de derechos de terceros. Estos actos son expresiones propias del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de manera general, no pueden ser válidamente orientadas o restringidas.
- En segundo lugar, concurren aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso en el cual sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, **la restricción correspondiente solo devendrá legítima cuando cumpla con finalidades constitucionalmente obligatorias, como son precisamente la protección de los derechos fundamentales de otras personas.**

Esta última situación se advierte en el presente asunto, pues si bien, el quejoso es sujeto del derecho humano al libre desarrollo de su personalidad, lo cierto es que, dicho derecho se ve limitado en cuanto se ven afectadas terceras personas con el ejercicio de dicho derecho a auto consumir de manera lúdica marihuana, pues su consumo trae aparejada un sinnúmero de consecuencias, las cuales incluso pueden afectar a menores o mujeres embarazadas que se encuentren presentes cuando el quejoso -en caso de concederse el amparo- se encuentre consumiendo marihuana en el libre ejercicio del desarrollo de su personalidad, **siendo ahí cuando colapsa su derecho frente al de terceros.**

En efecto, la libertad personal prevista como un derecho elemental, tanto en el artículo 1º como en los principios fundamentales del derecho que en forma abstracta están contemplados en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse como un atributo consustancial de la naturaleza humana y como la facultad de elección para hacer o dejar de hacer algo, **siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.**

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que, al reconocer la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, es bajo el entendido de que su eficacia es matizada, es decir, **con un alcance que tendrá que ser graduado o modulado en cada caso atendiendo al peso relativo de los derechos o intereses con los que aquéllos entran en colisión.**

Existe una esfera de actuación puramente privada, que queda fuera del alcance de las normas constitucionales, en el que los individuos son libres de discriminar a la hora de seleccionar las personas con las que van a relacionarse (contraer matrimonio con quien gusten, invitar a casa a quien crean conveniente, asociarse con quien deseen y negarse a entrar a un determinado establecimiento, por lo motivos que sean); de regular esas relaciones (determinando el contenido de los contratos, estatutos sociales o de las disposiciones testamentarias) y de comportarse, en general de una manera que le está vedado a los órganos públicos regular. En pocas palabras, en cuanto más cercana es una relación interpersonal, más limitada debe ser la interferencia en la autonomía individual.

Por el contrario, cuanto más nos alejamos de esa esfera íntima de proximidad, mayor alcance tendrá el principio de igualdad. Así, previo al juicio de ponderación y razonabilidad, el intérprete tendrá que analizar el tipo de relación que se está sucediendo entre los particulares y contextualizarla de forma adecuada. **Cuanto mayor sea la desigualdad de facto entre los sujetos de la relación, mayor será el margen de autonomía privada cuyo sacrificio es admisible.** Dicho de otro modo, cuanto menor sea la libertad de la parte débil de la relación, mayor es la necesidad de protección.

En esa lógica, existen tres factores que resultan útiles para medir la incidencia de los derechos fundamentales, y en particular la prohibición de no discriminación en el tráfico jurídico-privado, cuando se ve enfrentado con el principio de autonomía de la voluntad, a saber, son los siguientes:



- a) La presencia de una relación asimétrica, en la que una de las partes ostenta una posición de clara superioridad frente a la otra. Cuanto mayor sea la desigualdad de facto entre los sujetos de la relación, mayor será el margen de autonomía privada cuyo sacrificio es admisible. Dicho de otro modo, cuanto menor sea la libertad de la parte débil de la relación, mayor es la necesidad de protección.
- b) La repercusión social de la discriminación, es decir la existencia de un patrón de conducta generalizado o bastante extendido, desde un punto de vista sociológico. Cuando concurre esta circunstancia, la decisión discriminatoria deja de ser un asunto estrictamente privado y pasa a ser un asunto de relevancia pública.
- c) Valorar la posible afectación al núcleo esencial de la dignidad de la persona discriminada. Por tanto, asumida la necesidad de que los órganos judiciales deben dilucidar en cada caso y mediante la correspondiente ponderación del derecho en el concreto conflicto surgido entre particulares, se evita el riesgo que algún sector de la doctrina advierte respecto a la supuesta desaparición de la autonomía de la voluntad como consecuencia de las posiciones que defienden la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. No se trata sólo de declarar en abstracto que un derecho es eficaz entre particulares, sino, más bien, determinar la medida o intensidad de esa eficacia.

El principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, **que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado**. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

En este sentido, los derechos de protección de las referidas garantías son derechos constitucionales encaminados a que el Estado organice y maneje el orden público de una determinada manera por lo que respecta a la relación recíproca de sujetos jurídicos iguales, por lo que si el Estado no evita las intervenciones de los particulares sin sustento legal en bienes protegidos, entonces las permite. Así, las libertades fundamentales en un entorno social no se eliminan o se excluyen entre sí, **de tal suerte que corresponde a la autoridad adoptar las medidas pertinentes que permitan o garanticen la coexistencia de prerrogativas convergentes**; pues de no entenderse así, se llegaría a la ilógica conclusión de que las libertades fundamentales consagradas en un orden jurídico nacional son de diverso nivel jerárquico y que, por virtud de ello, unas tienen preeminencia sobre otras, cuando lo que debe procurarse es el prudente equilibrio de las libertades fundamentales concurrentes a fin de que todas incidan en la esfera jurídica de los gobernados con el deliberado propósito no sólo del respeto al Estado social, humanista, solidario y democrático.

Tratándose del cannabis sativa para realizar diversos actos (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera), no existe una regulación para uso con fines industriales, por lo que al permitir estas conductas, no se garantiza la protección de terceros, entre ellos de los sectores vulnerables, tales como menores, discapacitados, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, trabajadores, etcétera pueden verse expuestos a los efectos dañinos del Tetrahidocannabinol (THC) cuando su concentración no sea menor al 1%, pues superior a esta genera efectos psicotrópicos.

Luego, es inconcuso que cuando se dice que los derechos fundamentales entran en conflicto, lo que de verdad se expresa es que las obligaciones de éstos son incompatibles entre sí, de manera que así es como se presenta la colisión de aquéllos, lo que a su vez correlativamente tiene frente a sí a las obligaciones cuya titularidad tiene a un sujeto determinado: el Estado; además a otro sujeto indeterminado: cualquier gobernado que se ubique en el supuesto fáctico de vulneración de alguno de aquellos derechos fundamentales y, si bien la colisión de éstos se presenta en dos formas: a) una interna; y b) otra externa, lo cierto es que no hay derechos fundamentales de primera o de segunda sino de igual jerarquía.

De lo anterior, podemos advertir que la libertad se tiene para consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano y no para degenerar la personalidad de éste, por lo que no puede considerarse que la autodestrucción del individuo, sin posibilidad de restringir tal conducta, pueda tomarse como una forma de realizar el mandato constitucional de respeto a la dignidad humana, cuando es precisamente ésta, la primera lesionada por los efectos que se producen al consumir marihuana. Efectos que evidentemente, no ayudan a desarrollar la personalidad del individuo con el más alto nivel de vida físico y mental.

El consumidor de dichas drogas, no actúa con libertad, sino impulsado por una fuerza sensitiva, pierde su libre albedrío y está sometido a dicha fuerza sensitiva. No puede haber libertad contra la dignidad. Aun cuando sea un acto privado conforme al principio de autonomía de la voluntad, **el consumo de drogas no constituye un acto indiferente, sino lesivo contra el bien común y desconocedor del interés general**. Consecuentemente, el Estado se encuentra facultado para



imponer limitaciones al libre desarrollo de la personalidad del quejoso, prohibiendo toda actividad relacionada con el consumo de marihuana que colisiona con los derechos de terceros, por lo que es permisible su prohibición, a fin de lograr los fines del Estado Social de Derecho, y evitar que se vulnere la dignidad humana y la salud pública.

Lo anterior tiene sustento en la tesis número XI.1o.A.T.52 K (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en el registro 160246 del IUS y en la página 1081, del Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: ***"COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LIBERTAD DE TRABAJO Y LIBRE CIRCULACIÓN. SE VIOLAN DICHAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SI LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA MATERIA DE MANERA OMISIVA TOLERA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES POR UN TERCERO (PARTICULAR) QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY LE SON EXCLUSIVAS DE ELLA."***

CONSTANCIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO.

Se destaca a su Señoría que en relación con el acto que se acepta, consistente en la promulgación de la Ley General de Salud, el C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos carece de constancias que remitir a ese H. Juzgado, puesto que dicha Ley y la reforma a la misma, se encuentran debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 1984, y el 19 de junio de 2017, respectivamente, en ese orden de ideas, al constituir derecho vigente, no es objeto de prueba.

No obstante, a efecto de robustecer la legalidad y constitucionalidad de las normas impugnadas por el quejoso, y para colaborar con la impartición de justicia que administra su Señoría; se ofrecen como pruebas las siguientes constancias que se adjuntan al presente en dicho medio, dado el volumen de documentos que implica:

1. Copia del oficio CONADIC-CNCA-179-09-2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, dirigido a la suscrita, el cual contiene un anexo con 15 fojas.
2. Copia del oficio número SAP-HPSRM-257-2016, de fecha 09 de septiembre de 2016, suscrito por el Director del Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel Ramírez Moreno".
3. Copia del oficio número SAP-HPSRM-010-2017, de fecha 19 de enero de 2017, suscrito por el Director del Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel Ramírez Moreno".
4. Copia del oficio número SAP/HPSRM/DIR/004/2016, de fecha 05 de enero de 2015, suscrito por el Director del Hospital Psiquiátrico "Dr. Samuel Ramírez Moreno".
5. Copia del oficio número SAP-HPFBA-SSA-DSAE-59-2017, de fecha 23 de enero de 2017, dirigido a la Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, suscrito por el Jefe de la División de Servicios Ambulatorios Especializados del Hospital psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez".
6. Copia del oficio número SAP-HPFBA-SSA-DSAE-58-2016, de fecha 13 de septiembre de 2016, dirigido a la Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, suscrito por el Jefe de la División de Servicios Ambulatorios Especializados del Hospital psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez".
7. Copia del oficio número SAP-HPIJNN-010-2017, de fecha 23 de enero de 2017, dirigido a la C. Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, suscrito por el Director de Servicios de Atención Psiquiátrica Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro".
8. Copia del oficio número SAP-HPIJNN-279-2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, dirigido al Director Contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, suscrito por el Director de Servicios de Atención Psiquiátrica Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro".

Por lo antes expuesto y fundado, a usted C. Juez, atentamente pido:

Primero. Tener por rendido en tiempo y forma el informe justificado solicitado al C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.



180

Segundo. Tener por señalado como domicilio para oír y recibir las subsecuentes notificaciones y documentos, el domicilio ubicado en Marina Nacional número 60, piso 15, Colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, Código Postal 11410, Ciudad de México.

Tercero. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tenga como delegados a los licenciados en Derecho [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], así como a los pasantes en derecho [REDACTED] y [REDACTED], indistintamente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, atentamente solicito se permita la consulta vía internet del expediente electrónico citado al rubro, bajo el nombre de usuario [REDACTED] y [REDACTED].

Cuarto. En su oportunidad decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones vertidas en éste informe y en su caso, negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Quinto. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Circular 12/2009, de fecha 18 de marzo del 2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la tesis número I.13o.T.15 K, emitida por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el registro 2007298 del IUS y en la página 1560, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." (sic.), solicito se permita a los delegados citados, indistintamente, el uso de escáner y/o cámara digital, grabadoras y/o lectores ópticos, para la reproducción electrónica de todas las actuaciones judiciales que se alleguen al juicio, así como de los acuerdos dictados en el expediente en comento.

Atentamente.
La Directora Contenciosa

Lic. Ana Lucía Flahuech Rivera

Elaboró: CALB

Avenida Marina Nacional No. 60, piso 15, Alcaldía Tacuba, Demarcación
Territorial Miguel Hidalgo, CP. 11410, Ciudad de México



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



2019
AÑO DEL CUADRIENIO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
Dirección Contenciosa



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL
DIRECCIÓN CONTENCIOSA